

Son copias que certifico. San Cristóbal Las Casas, Febrero 14 de 1874.—*J. Crisóstomo Lara.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 6 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Chiapas por Josefa Rojas, contra el Juez del estado civil del pueblo de Tenejapa que mandó sepultar un cadáver en un terreno de su propiedad, y ha resuelto, cercarlo para panteon, cuyas providencias violan en sentir de la quejosa las garantías consignadas en los artículos 14 y 16 de la Constitución federal. Visto el informe que sobre la suspensión del acto reclamado rindió la autoridad, contra la cual se solicita el amparo, manifestando, que el terreno que ocupa Josefa Rojas pertenece á los egidos del pueblo, y está destinado para panteon desde el año de 1872 por el Ayuntamiento del lugar.

Considerando: que por las pruebas rendidas en este recurso, aparece que la Sra. Rojas hace por lo menos dos años que está en posesión del terreno que ocupa con casa y sementeras.

Que no aparece justificado que la autoridad municipal hubiera procedido á la ocupación del terreno mencionado cumpliendo con los requisitos que exigen las leyes para la expropiación por causa de utilidad pública, ó con las prescripciones legales particulares al Estado, relativas al uso de los egidos de los pueblos, en caso de pertenecer el terreno á los egidos de la localidad, como sostiene el Juez del registro civil.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 16, 27 y 101 de la Constitución federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Chiapas en 14 de Febrero del presente año, y se declara: que la Justicia de la Union ampara

y protege á Josefa Rojas, contra los actos del Juez del estado civil del pueblo Tenejapa, que la ha perturbado en su posesión.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Tosa.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Artaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Juan Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Junio 11 de 1874.—*Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de México por Cirilo Torres, contra el Cefe político de Lerma, que lo juzgó y sentenció á la pena de muerte, por el robo con asalto en despojado verificado el 1º de Setiembre de 1872, en el punto llamado "El Rodeo."

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el reo Cirilo Torres ha interpuesto el recurso de amparo contra la sentencia pronunciada por el C. Cefe político del Distrito de Lerma, á 26 de Mayo último, por la que lo condenó á la pena de muerte, por los delitos de asalto y robo perpetrados el día 1º de Setiembre de 1872 en un parage conocido con el nombre "El Rodeo," comprension de Lerma; afirmando el quejoso, que en su persona se han violado las garantías que otorgan los artí-

culos 18 y 20 de la Constitucion general.

De las constancias de autos y especialmente del testimonio de la causa que la autoridad política de Lerma, remitió por vía de justificacion al informe que sobre el particular se le pidió, aparece que dicha autoridad, obrando conforme á las atribuciones de la ley de 3 de Mayo del año anterior y su relativa, ha juzgado y sentenciado al expresado Cirilo Torres con arreglo á la propia ley.

Si la apreciacion que hizo el C. Gefe político, de las pruebas que figuran en el proceso de Torres, no es ajustada á los principios de una estricta jurisprudencia, motivo será este de responsabilidad, pero no para que se sostenga que violó las garantías que invoca el reo Cirilo Torres.

La referida autoridad política ha cumplido con las prescripciones de la ley que la facultó para conocer de los delitos de asalto y robo; y en el caso, el recurso de amparo interpuesto por Cirilo Torres, no procede.

En esta inteligencia, el que suscribe, con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, y ley de 3 de Mayo de 1873, pide al Juzgado se sirva declarar: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al referido Cirilo Torres, contra la sentencia de 26 de Mayo último pronunciada por el C. Gefe político del Distrito de Lerma, por la que lo sentenció á la pena capital por delitos de asalto y robo.

Toluca, Agosto 3 de 1874.—Ceballos.—
Una rúbrica.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Toluca, Agosto 15 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por Cirilo Torres, originario y vecino del pueblo de Atarasquillo del Distrito de Lerma, con el objeto de que la Justicia federal lo ampare contra la providencia dictada por el C. Gefe político de dicho Distrito, en virtud de la cual lo condenó á muerte, juzgándolo reo del de-

lito de asalto y robo en despoblado, con cuya sentencia entiendo el promovente que se violaron las garantías individuales, otorgadas por la Constitucion general, en sus arts. 18 y 20. Visto lo pidió por el Promotor fiscal de Hacienda, así como lo informado por la autoridad responsable; y visto por último el resultado de la prueba rendida por Torres y muy especialmente la copia certificada del proceso. Teniendo en consideracion:

Primero: que el delito por el que fué juzgado y condenado Cirilo Torres por la Gestatura política de Lerma, es el de asalto y robo fuera de poblado.

Segundo: que para esta clase de delitos, están suspensas por la ley de 3 de Mayo del año próximo pasado, las garantías comprendidas en la parte primera del art. 18, en la parte primera tambien del art. 10 y en todas las que forman los arts. 20 y 21 de la Carta fundamental.

Tercero: que el art. 39 de la citada ley de 3 de Mayo, solo manda, que los que no son aprehendidos inflaganti, sean juzgados sumaria á verbalmente, admitiéndoles las pruebas y defensas que presentaren.

Cuarto: que es de toda evidencia, que no toca á la Justicia federal hacer declaracion alguna, sobre sentencias pronunciadas por autoridades competentes; porque de otra manera, el Juzgado federal, extralimitando sus facultades, se constituiria en Tribunal de revision; que la infraccion de dicho art. 39 en concepto de este Juzgado, no importa la violacion de una ó mas garantías, sino solo la infraccion de una ley, la cual ameritará alguna providencia por la autoridad que corresponde, pero nunca el amparo por violacion de garantías, supuesta la suspension decretada en el art. 19 de la citada ley.

Quinto: que aunque pudiera sostenerse que no obstante lo preceptuado en dicho art. 18, la autoridad política no está relevada de la obligacion de acatar las garantías consignadas en el art. 20 de la ley suprema del pais, en el caso que nos ocupa, ninguna de ellas dejó de respetarse.

Sesto: que teniendo impuesto por la ley, el asalto y robo la pena de muerte, y habiendo tenido la autoridad que formó el proceso los datos que resultaron en él, no procedía la escarcelación en fiado, en cuyo caso no se violaron las garantías del art. 18.

Sétimo: lo alegado por las partes, con todo lo demás que ver convino.

La Justicia de la Unión, con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución general, así como con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, declara: que no ampara ni protege á Cirilo Torres, contra la providencia dictada por el C. Gefe político del Distrito de Lerma, en virtud de la cual fué condenado á la pena de muerte.

Hágase saber esta sentencia al C. Promotor fiscal personalmente, y por medio de exhorto al promovente; publíquese por los periódicos de costumbre y Semanario Judicial, y fecho, elévese este expediente para su revision á la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El C. Lic. Ramon Ortigosa, Juez de Distrito en este Estado, así definitivamente juzgando lo sentenció y firmó. Damos fé.—*Ramon Ortigosa.*—*A.*—*Manuel Ojal y Piña.*—*A.*—*Ignacio Gonzalo.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 10 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito del Estado de México por Cirilo Torres, contra el Gefe político de Lerma, que lo juzgó y sentenció á la pena de muerte por el robo con asalto en despoblado, verificado el 1º de Setiembre de 1872, en el punto llamado "El Rodeo," y

Considerando: que el Gefe político de Lerma, ha procedido dentro del círculo de las facultades que le otorga la ley de 3 de Mayo de 1873, y sujetándose en sus procedimientos á ella; que por lo mismo, que no

se han vulnerado en la persona del quejoso las garantías que invoca, consignadas en los arts. 18 y 20 de la Constitución general; por lo expuesto, de conformidad con lo que dispone en el art. 101, y por sus propios y legales fundamentos, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio á 15 de Agosto último, por el Juez de Distrito del Estado de México, que declara: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege á Cirilo Torres, contra la providencia dictada por el Gefe político del Distrito de Lerma, en virtud de la cual fué condenado á la pena capital.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los fines consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 4 de 1874.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.